PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

LEY 882 DE 2004

(junio 2)

por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 229 de la Ley 599 de 2000 quedará así:

Violencia Intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútense.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

*Sabas Pretelt de la Vega.***MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA**

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 080 DE 2004

(mayo 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1918 del 30 de octubre de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Vergara, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 4 de noviembre de 2003 decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Vergara, portador de la cédula de ciudadanía número 73125032 expedida en Cartagena, la cual se hizo efectiva el 6 de noviembre de 2003, por miembros de la Policía Nacional.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota Verbal número 2287 del 23 de diciembre de 2003, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Vergara.

En la mencionada Nota informa:

“Juan Carlos Rodríguez Vergara es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la Resolución de Acusación número 03-20802 CR-LENARD, dictada bajo sello el 26 de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo 1. Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 952 (a), 963 y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo 2. Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 841 (a) (1), 846 y 841 (b) (1) (A) (ii) del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargos 3, 4 y 5. Intento de importar en los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 952 (a), 963 y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra el señor Rodríguez-Vergara por estos cargos fue dictado el 26 de septiembre de 2003 por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica, mediante Oficio OAJ.E. número 1322 del 24 de diciembre de 2003, conceptuó:

“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal Colombiano.”

5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante Oficio número 00669 del 22 de enero de 2004, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Vergara, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 517 del Código de Procedimiento Penal.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 5 de mayo de 2004, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Vergara, al encontrar acreditados todos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso.

Al respecto, manifestó:

“Acotación final

No está de más poner de presente al Gobierno Nacional que en caso de concederse la extradición, debe condicionar la entrega en el sentido de que Juan Carlos Rodríguez Vergara no será juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, al tenor del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal, se cumplen satisfactoriamente, la Sala Conceptúa Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Vergara, en cuanto tiene que ver con los cargos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto que le fueron imputados en la Acusación número 03-20802 - LENARD dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida...”

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Penal, el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Vergara, portador de la cédula de ciudadanía número 73125032 expedida en Cartagena, para que comparezca a juicio por el **Cargo 1** (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína), **Cargo 2** (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína), **Cargos 3, 4 y 5** (Intento de importar en los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína), referidos en la Resolución de Acusación número 03-20802 CR-LENARD, dictada

bajo sello el 26 de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal establece:

“Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquirido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o Sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluso el acusado, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la detención en Colombia”.

El defensor del ciudadano requerido, allegó al expediente la certificación expedida el 31 de marzo de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, a través de la cual se informa que en contra de Juan Carlos Rodríguez Vergara se adelanta el Proceso número 04-002 por el delito de tráfico de estupefacientes y advierte:

“Que revisado cuidadosamente el expediente se tiene que la Fiscalía 14 Especializada adscrita a la UNAIM destacada ante la DIJIN y DIRAN Bogotá, D. C., en decisión del cinco de noviembre de 2003, en el punto primero y segundo de la misma, resolvió dictar Resolución de Acusación e impuso medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra, entre otros, de Juan Carlos Rodríguez Vergara, respectivamente...”

El apoderado del señor Rodríguez Vergara manifiesta que es improcedente la extradición por cuanto, a su juicio, el citado proceso se adelanta por los mismos hechos. Este planteamiento no resulta acertado por cuanto las conductas ilícitas de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes, por su carácter transnacional pueden ser objeto de sanción de manera independiente.

El artículo 35 de la Constitución Política establece que «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior». Los cargos que motivan esta solicitud de extradición se refieren a un concierto para importar y para poseer con la intención de distribuir cocaína. El país requirente manifiesta en este caso que Juan Carlos Rodríguez Vergara hace parte de una organización delictiva que transporta “cantidades múltiples de kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, específicamente Miami, Florida. La organización de tráfico de narcóticos ha estado traficando cocaína desde por lo menos agosto de 2002 y continúa haciéndolo hasta la fecha...”.

El fundamento que se señala en la solicitud es el concierto para importar sustancia estupefaciente a los Estados Unidos de América y como ha quedado expuesto, en aras de combatir esta clase de criminalidad organizada, los países afectados pueden sancionar autónomamente esos delitos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al rendir concepto dentro del trámite de extradición número 10624, en relación con delitos de tráfico ilícito de drogas, manifestó:

“... porque tratándose de unas actividades progresivas que van desde el cultivo de plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando por toda la gama de producción, almacenamiento, transporte, exportación, porte y comercialización, etc., bastará con demostrar una sola de ellas para que la conducta se considere completa, lo que en nada obsta para que en parte esos comportamientos se realicen en un territorio siendo merecedores de su reproche en él, y otra alcance su realización en el exterior, donde igualmente será objeto de represión autónoma.” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición número 10624. Mayo 22 de 1996). (Se subraya).

En este mismo sentido también señala la Corte Suprema de Justicia:

“Repárese que la norma constitucional (artículo 35) se refiere sin matizaciones a «delitos cometidos en el exterior», de modo que la realización, puede ser total o parcialmente cumplida fuera de los límites territoriales patrios (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Abril 25 de 2001. Extradición número 16.708). (Se subraya).

Obsérvese que la extradición que se concede es por los delitos cometidos en el exterior, pues tratándose de conductas de tráfico ilícito de drogas se está en presencia *“de unas actividades progresivas”*, tal y como lo afirma la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual, nada obsta para que esas actividades tengan ocurrencia *“y sean merecedoras de reproche”* en territorios diferentes.

Ahora bien, puede advertirse que, en este evento, con anterioridad a la solicitud de detención con fines de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, se adelanta un proceso penal en contra del ciudadano requerido por conductas relacionadas con narcotráfico, lo que hace que se presente la hipótesis prevista en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal que le otorga al Gobierno Nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega.

El Gobierno Nacional en este caso, en uso de su poder discrecional, atendiendo las conveniencias nacionales, no considera pertinente aplazar la entrega y por el contrario ordenará que se proceda a la misma previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.

9. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el inciso 1° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

10. El inciso 2° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal establece que si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.

La honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad en contra de, entre otros, el artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal (hoy reproducido en el artículo 512), resolvió:

“Tercero: Declarar EXEQUIBLE el primer inciso del artículo 550 del Código de Procedimiento Penal, así como el segundo inciso de la norma citada, pero este último bajo el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo se hará bajo la condición de la conmutación de la pena, como allí se dispone, e igualmente, también a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Vergara, portador de la cédula de ciudadanía número 73125032 expedida en Cartagena, para que comparezca a juicio por el **Cargo 1** (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína), **Cargo 2** (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína), **Cargos 3, 4 y 5** (Intento de importar en los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína), referidos en la Resolución de Acusación número 03-20802 CR-LENARD, dictada bajo sello el 26 de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Vergara, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal (anterior artículo 550), previa información al mismo de lo resuelto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 6°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 081 DE 2004

(mayo 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1) 171 del 22 de julio de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana Miryam Tovar Durán, quien se encuentra requerida para comparecer a juicio por delitos de narcóticos.

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 23 de julio de 2003 decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana Miryam Tovar Durán, identificada con la cédula de ciudadanía número 39524140, la cual se hizo efectiva el 25 de julio de 2003, por miembros de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1621 del 22 de septiembre de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana Miryam Tovar Durán.

En la mencionada Nota informa:

“Miryam Tovar-Durán es requerida para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es la sujeto de la segunda Resolución de Acusación número S2 03 CR 902 (HB), dictada el 4 de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, mediante el cual se le acusa de:

-- Cargo Uno. Concierto para importar a los Estados Unidos 1 kilogramo o más de heroína, en violación del Título 21 Secciones 812, 952, 960 (b) (1) y 963 del Código de los Estados Unidos; y